

En la sesión ordinaria efectuada el treinta de marzo de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Magistrado Miguel Valadez Reyes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, relativo a material de difusión del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante decreto número 176 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, tercera parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Que mediante decreto número 180 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, cuarta parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que el diecinueve de marzo del año dos mil quince, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto el oficio 9V/2015 de fecha dieciocho del mismo mes y año, signado por el Magistrado Miguel Valadez Reyes, en su calidad de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, mediante el cual realiza una consulta relacionada con la factibilidad de realizar una campaña de difusión relativa al funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial durante el periodo marcado como veda electoral.

CUARTO. Que en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General de este Instituto Electoral el veintiocho de marzo de dos mil quince, se dio cuenta del escrito referido en el resultando anterior y se ordenó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral procediera a elaborar el proyecto de acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público local electoral y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

SEGUNDO. Que el artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que el artículo 81 de la ley electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

CUARTO. Que el artículo 82, párrafo primero, del citado ordenamiento indica que el Consejo General estará integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

QUINTO. Que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

En la disposición constitucional referida se establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

SEXTO. Que el artículo 92, fracción XXVI, de la ley comicial local establece que es atribución de este Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de la propia ley.

SÉPTIMO. Que en el escrito referido en el resultando tercero de este acuerdo, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado plantea lo siguiente:

“... pongo a su consideración el material de difusión referente al funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, para efecto de someterlo a consulta del Consejo que tiene a bien presidir y sea tan amable de informarnos si puede ser distribuido y expuesto durante el periodo marcado como *veda electoral*.

Se adjunta:

- CD con spot Oralidad Penal región III
- Imagen de Espectacular
- Infografía
- Tríptico del funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal en idioma inglés y español”

OCTAVO. Del contenido del escrito antes mencionado y sus anexos, se observa que la consulta formulada por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, se relaciona con la factibilidad de utilizar material de difusión referente al funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial en el estado de Guanajuato.

Asimismo, el material aludido se conforma con diversos elementos publicitarios, como lo son tres *spots* publicitarios, una imagen que se utilizará en espectacular, infografía y dos trípticos —en idioma español e

inglés— del funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, todos y cada uno ellos encaminados a la difusión del referido sistema.

Del material antes señalado, se puede desprender que serán utilizados dentro de una campaña de difusión, pues por su naturaleza se infiere que serán entregados dentro de una actividad de promoción hacia la población del estado de Guanajuato.

Asimismo, el material de difusión establece que el nuevo sistema de justicia penal iniciará en la región sureste del estado el quince de abril del año en curso y que abarcará los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortazar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria.

Por otro lado, si bien es cierto que el nuevo Sistema inicia el quince de abril de este año, es común que la difusión de un evento de esta naturaleza pueda difundirse varios días antes y después de la iniciación del nuevo Sistema, ello para el conocimiento previo y posterior de su iniciación.

En tal sentido, y en relación a la consulta planteada, debe atenderse, en principio, al contenido del artículo 41 base III, apartado C, párrafo segundo, así como del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen las bases generales a observar por los servidores públicos al realizar propaganda gubernamental.

El contenido del artículo 41 en su base III, apartado C, párrafo segundo, prescribe que durante el tiempo en el que se desarrollen las campañas electorales, federales y locales, y hasta su conclusión, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, permitiéndose excepcionalmente las campañas de información de las autoridades electorales, así como las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en los casos de emergencia.

Por otro lado, el párrafo octavo del artículo 134 de nuestra Carta Magna impone como obligación que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social, y bajo ningún motivo debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En el ámbito local, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato establece en sus artículos 203 y 350, fracciones II y IV, que se encuentra prohibido y constituyen infracciones de las autoridades o de los servidores públicos, la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, así como de los órganos autónomos locales y cualquier otro ente público, dentro del periodo comprendido desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia, así como la que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Pese a la prohibición general de difundir propaganda gubernamental, la divulgación de los materiales de difusión materia de la consulta se ubica en los supuestos de excepción para la difusión de esta propaganda durante las campañas electorales, contemplados por el artículo 41 en su base III, apartado C, párrafo segundo, toda vez que su contenido tiene naturaleza educativa y de promoción de la cultura jurídica de la población, a partir del concepto integral que sobre la educación proporciona el artículo tercero de la Constitución General de la República, ya que pretende lograr una formación en materia de cultura de la legalidad, al buscar dar seguridad jurídica a la población y al permitirle conocer las características de este nuevo sistema de justicia, ya que brinda herramientas a la sociedad en general para conocer y comprender la transición al nuevo sistema acusatorio y oral.

Además, lo afirmado concuerda con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación del registrado bajo el índice SUP-RAP-83/2015, al referirse a la implementación del sistema de justicia penal, en cuya resolución se manifestó en el sentido de que es necesario concientizar a las personas de las nuevas características de este nuevo sistema de justicia, ya que para su éxito se requiere que sea conocido por los actores directamente involucrados en la impartición de justicia, además de que se conozca por toda la sociedad mexicana, a efecto de fomentar un cambio en la percepción social de la cultura jurídica y de legalidad en el sistema penal mexicano. Para la materialización de esto, es necesaria una política educativa encaminada a asegurar una

formación cívica mínima de los ciudadanos para la plena conciencia de sus derechos a la luz del nuevo sistema acusatorio.

Por lo que al estarse en presencia de una campaña de comunicación institucional con fines educativos para la difusión de la cultura de la legalidad y la seguridad jurídica a través de la concientización del nuevo sistema de justicia penal, se concluye que esta propaganda no vulnera los principios de equidad e imparcialidad y puede ser transmitida durante la fase de campaña electoral y hasta la conclusión de la jornada electoral, al tener fines informativos, educativos y de orientación social.

Lo anterior no debe ser obstáculo para que esta campaña cumpla los requisitos de ser institucional, absteniéndose de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien, elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno; por tal motivo, no podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.

Criterio que es coincidente, *mutatis mutandi*, con el sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 38/2003 publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 75 y 76, cuyo texto es el siguiente:

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o

perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafos primero y segundo, 81 y 82, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos precisados en el considerando octavo, se da respuesta al oficio signado por el Magistrado Miguel Valadez Reyes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Con copia certificada de este acuerdo, notifíquese al Magistrado Miguel Valadez Reyes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en su domicilio oficial.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario Ejecutivo.